



EL MERO VENGADOR, POR RAY TROLL

Desafíos de la América indígena

Ecuador después del golpe • Chile: huelga de hambre de los presos mapuche
Paraguay, la puerta trasera de la Amazonia • Claroscuros de Lula y Evo Morales

Devastación ambiental y resistencia en México
Avaricia minera contra San Juan Copala y el desierto de Virikuta

Poesía de Juan Álvarez (tseltal) y Maurice Kenny (mohawk)

Con un abrazo para nuestros hermanos mixes de Tlahui

Vientos encontrados corren por las Américas, sobre todo la llamada Latina, la América nuestra. Fuertes cambios de los buenos, y de los malos. Por un lado, avanza inexorable la destrucción del capitalismo en su etapa más letal sobre los suelos y subsuelos de nuestros países, contra el aire, el mar, los ríos, sus pescaditos, y al final y principalmente, los pueblos que le son suyos a la tierra, los que de por sí. Se les intenta llamar de muchas maneras: nativos, originarios, aborígenes, tradicionales. O bien, de modo cosificador, etnias. O indios, indígenas, y entre las clases acomodadas, "inditos". Naciones, tribus, en fin, pueblos.

Por otro lado, estos pueblos, sus movimientos y nacionalidades experimentan un despertar profundo y extraordinario. Con terribles vientos en contra, han impulsado la transformación mental y material de sus comunidades, de los Estados nacionales donde se encuentran. En Ecuador y Bolivia conquistaron ya el reconocimiento a la plurinacionalidad y avanzan objetivamente hacia la autodeterminación política, territorial, medioambiental, cultural. Sus actuales gobiernos nacionales, considerados progresistas, y hasta "de izquierda" por los entusiastas, no se sostendrían sin los experimentados y maduros pueblos y organizaciones indígenas, a tal grado que resultaron determinantes a la hora de echar del poder a los neoliberales de derecha que antecedieron a Evo Morales y Rafael Correa.

La reconstitución del pueblo mapuche en Chile, ejemplar y dolorosa, ha sido aplastada y negada con trato de criminal por la dictadura y la democracia por igual. Lo sorprendente es que, con tantas tempestades en contra, fortaleza su fructífera resistencia a precio de balas y cárcel, de inanición, pero también de lucha, solidaridad, rebeldía y claridad en sus demandas históricas, hoy más vivas que nunca, desde cuando los redujeron los generalotes de Chile y Argentina y creyeron exterminarlos.

También dolorosa, por momentos desesperada, es la resistencia de los guaraní kaiowá en el Mato Grosso de Brasil. Ocho años de gobierno buena onda de Lula el saliente no alcanzaron para hacerles justicia; ellos mismos debieron recuperar tierras, al igual que los mapuche, pero permanecen rodeados de agroindustrias, pastizales y pistoleros, sin más respiro que las limosnas de Brasilia.

No hace falta cargar mucho la tinta para concluir que México está sumido en

el desastre. Con un gobierno nacional ilegítimo que ha militarizado el país y un divorcio abismal entre las instituciones y los pueblos indígenas, las resistencias atraviesan en soledad horas difíciles y peligrosas. El desmantelamiento del municipio autónomo de San Juan Copala no pudo ser más brutal, criminal e impune. Los narcotraficantes, más que el narcotráfico, mantienen sitiadas miles de comunidades nahuas, tlapanecas, mazahuas, purépechas, mixtecas, zapotecos, tenek, mayo, yaqui, wixárika. En Guerrero, Oaxaca, Sonora, las Huastecas, Puebla, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Durango. Más no cuentan con las instituciones. De hecho, policías y militares también les tienden cercos. Se les condena a la migración o el exilio, la domesticación, el despenadero del exterminio. Súmense las crecientes devastaciones ambientales — desgajamientos, inundaciones, sequías, envenenamientos— producto de la voracidad ecocida del modelo económico impuesto por el mercado "libre".

Los países de la América nuestra pierden a pasos agigantados selvas, ríos, montañas. Lo mismo bajo gobiernos rapaces de derecha (México, Colombia, Perú, Chile) que democráticos, socialistas, progresistas (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay, y muy pálidamente, Nicaragua, El Salvador, Guatemala). Todos los gobiernos, hasta los mejoritos, abren sus puertas a las trasnacionales mineras, petroleras, agroindustriales, turísticas, eléctricas. El extractivismo autoritario en clave neoliberal goza de cabal salud incluso en las prácticas nacionalistas de Correa, Lula, Chávez o Morales.

En este contexto las exigencias y oposiciones de los pueblos en Ecuador y Bolivia no han sido entendidas por la izquierda latinoamericana, una vez más. Al contrario, aprovechando este desencuentro teórico y práctico, sus respectivos gobiernos acusan a los indígenas de estorbar al progreso, sostener demandas egoístas o ser agentes embozados del imperialismo. Craso error. ¿Será que las izquierdas nunca entenderán que las posibilidades de sobrevivencia de nuestros países dependen en buena medida de que los pueblos originarios conquisten sus derechos y recuperen su mundo? ¿Que como siguen enseñando las comunidades autónomas zapatistas de Chiapas, sitiadas y en silencio vivo, el futuro se cuida resistiendo?

umbrell

Cuando en realidad

Maurice Kenny

Anoté en mi diario que sólo había comido una naranja y algo de queso está mañana, y qué tomé un tarro de café.

Cuando la verdad al amanecer ya había desayunado iguanas, coyotes, plata y cactus y un solitario labrador en el desierto.

Bebí cielo, sol y nubes; mis ojos devoraron praderas, montañas, países, continentes; los mundos gruñeron en mi estómago. Esta noche rebano la luna del oeste con cuchillo y tenedor, muerdo las estrellas crujiendo y me bebo el lento gemido de los lobos.

Maurice Kenny, poeta mohawk, ha sido uno de los inspiradores del renacimiento indígena en Estados Unidos. Nació en Westertown, en el norte del estado de Nueva York, en 1929. Vivió por años en México, Chicago y Brooklyn. En años recientes regresó a las montañas Adirondak, donde nació. (Traducción del inglés: HB)

DE NORTE A SUR: 21 ANIVERSARIO

Que dos décadas no son nada. Este octubre inundado y en calentamiento, global como todo, *Ojarasca* ofrece informaciones de un panorama nuevo, *latinoamericano* en grado inédito. Preocupante visto desde México, muy estimulante si se le mira desde el sur. El arte de la portada y las páginas en color son obra de Ray Troll, pintor adicto del agua y al destino de los peces. Vive en Ketchikan, Alaska. Las imágenes provienen de *Rapture Of The Deep* (Universidad de California, 2004). Sus ojos en el extremo norte nos muestran que las aguas de América, del Ártico al Amazonas, están en serio peligro.

Ojos en el extremo sur del continente, los fotógrafos Mariana Matthews y Patrick Bollen nos muestran los filos de las islas australes del Pacífico y la Tierra del Fuego. Las fotos de Matthews forman parte de la serie *Adoremus* (Editorial El Kultrun, LOM Ediciones, Santiago e Chile, 1998), íntimo registro de una fiesta religiosa en el archipiélago de Chiloé.

Bollen, fotoperiodista flamenco y especialista en la Patagonia, recorre en *Tierra del Fuego* (Lanoo Publishers, Tiel, Bélgica, 2000) los sures de Argentina y Chile, donde el viento da la vuelta. Donde el viejo Nuevo Mundo muere y renace.

Y para no dejar el centro, el artista Ivan Alechine retrata al jicuri en la Sierra Huichola, hacia 1995. Acaba de aparecer su libro *Poca Luz* (Editorial RM, México/Toluca Éditions, París, 2010), "ilustración" de su novela epónima, un verdadero viaje en el corazón huichol.

La Jornada

Directora General: Carmen Lira Saade

Publicidad: Marco Hinojosa.

Ojarasca

Dirección: Hermann Bellinghausen

Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera

Edición: Gloria Muñoz Ramírez

Fotografía y Diseño: Yuriria Pantoja Millán

Caligrafía: Carolina de la Peña • Retoque fotográfico: Alejandro Pavón •

Asesoría técnica: Francisco del Toro

La Jornada Ojarasca es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de cv. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, cp. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. • El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en *Ojarasca*, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de título y contenido: 14973, de septiembre de 2010. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 04-2010-070114295700-107. No se responde por materiales no solicitados. Impreso en Imprenta de Medios, SA de cv. Av. Cuauhtémoc 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.

En 82 días un cuerpo que ha dejado de ser alimentado pierde fuerza, salud y vitalidad llegando al límite de la muerte. En Chile un grupo de 34 presos políticos mapuche iniciaron el pasado 12 de julio una huelga de hambre, con el fin de llamar la atención de cómo un Estado los condena por su condición indígena, a través de la aplicación de una ley antiterrorista creada durante la dictadura de Pinochet en 1984.

Ante negociaciones directas con el gobierno, 23 mapuche movilizados dejaron la medida de presión el pasado viernes primero de octubre. Esto, debido a que el poder ejecutivo se comprometió a retirar las querellas por ley antiterrorista a los huelguistas y someterlos a juicios por derecho penal común en un máximo de 5 días hábiles, además de proseguir en las reformas a la justicia militar para que los civiles sean juzgados por tribunales ordinarios.

El acuerdo hace mención a las reformas a la ley antiterrorista realizadas por el Congreso a propósito de la huelga de hambre, que permiten no aplicar esta norma a menores de edad e indagar sobre la credibilidad de los testigos sin rostro, sin que se elimine este cuestionado instrumento, además de mantener el delito de incendio terrorista.

Por esta misma razón, catorce de los presos, la mayoría reclusos en la cárcel de Angol y en el hospital de Victoria, decidieron continuar poniendo su vida en juego para exigir que el Ministerio Público deje de aplicar a causas mapuche una ley considerada racista, expresando así una desconfianza histórica frente al Estado chileno. En un comunicado público, llaman al pueblo mapuche, a la sociedad chilena y a la comunidad internacional a seguir apoyando esta medida de fuerza, al tiempo que enfatizaron "algunos huelguistas no estamos dispuestos a avalar cambios jurídicos aparentes que no resuelven las cuestiones de fondo".

La ley racista. Desde 2002 los mapuche que defienden sus legítimos derechos territoriales han venido sufriendo las arbitrariedades judiciales por la criminalización de la protesta social, tal como lo denunció en su informe de 2003 el entonces relator para cuestiones indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen.

La ley 18.314, conocida como antiterrorista, permite restricciones al debido proceso, tales como: largos periodos de prisión preventiva (incluso ha llegado a durar un año), permite los testigos protegidos y sin rostro (que anula las posibilidades de un debido proceso), además de triplicar las condenas.

Por acciones como tomas de caminos rurales, tomas de predios en manos de empresas forestales que demandan como propios, incendios de pastizales y de maquinaria privada, que en el caso de otros movimientos sociales serían investigados y procesados por la justicia penal y civil, los

Mapuche frente al despojo histórico, la injusticia racista y el neoliberalismo

Susana Huenul y Claudia Villagrán

mapuche son procesados y condenados por la ley antiterrorista.

Es una ley aplicada de manera racista, pues como lo ha declarado públicamente el abogado chileno Jaime Madariaga, se procesa a los imputados por lo que son (derecho penal de autor) y no por lo que hacen (derecho penal de acto). Así se juzga a los mapuche por su condición de indígenas reclamando derechos territoriales ancestrales y no por la calidad de los hechos mediante los cuales se han manifestado para reivindicar sus demandas. Lo que ha pretendido infringir temor y disciplinamiento hacia la protesta social mapuche.

De ahí que las demandas hayan sido durante más de 80 días, y sigan siendo para los catorce movilizados, que nunca más se aplique la ley antiterrorista en causas mapuche, no al procesamiento de la justicia militar, la exigencia de derecho a un debido proceso, fin a los montajes políticos judiciales, la no utilización de testigos sin rostro y el término de prácticas que violan los derechos humanos básicos (extorsión, amenazas, torturas físicas y psicológicas en interrogatorios policiales); así como también la desmilitarización de las comunidades mapuche que reivindican derechos políticos y territoriales.

Construcción histórica y coyuntural del conflicto mapuche. El actual conflicto mapuche se arrastra desde su incorporación forzada al Estado chileno a través de la ocupación militar, a partir de 1850, llamada con eufemismo "Pacificación de la Araucanía", que los despojó de 95 por ciento del territorio ancestral que habían conservado soberanamente frente a la Corona española. Este antecedente se mantiene vivo en la memoria oral del pueblo mapuche y de sus autoridades tradicionales.

Con el correr de los años el despojo continuó por parte de colonos nacionales y extranjeros, llegados a la zona por la política de inmigración europea propiciada por el Estado chileno, lo que tuvo un quiebre durante la reforma agraria. Sólo durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-



FIESTA DEL NAZARERO, ISLA CAHUACHI, CHILE. FOTO: MARIANA MATTHEWS

1973), históricamente los mapuche recuperaron 197 mil hectáreas en la Región de la Araucanía. Con la contrarreforma agraria efectuada durante la dictadura de Pinochet (1973-1989), estos terrenos fueron devueltos a latifundistas o, en su defecto, vendidos a empresas forestales a muy bajos precios, generándose años más tarde grandes plantaciones forestales de pino y eucaliptos (el llamado desierto verde) en territorio indígena.

Cercadas las comunidades mapuche por las madereras, con el vivo recuerdo del despojo histórico, sumado a la falta de voluntad política de los gobiernos de la Concertación (1990-2010), que a pesar de haber promulgado una ley Indígena en 1993 y haber creado la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), defendieron los intereses económicos neoliberales por sobre la defensa del desarrollo sociocultural de los pueblos indígenas de Chile. Así se conjugaron los elementos que gatilla-

ron grosso modo la movilización de un sector de los mapuche a partir de 1997 y el denominado conflicto mapuche, como se conoce en la actualidad.

Un desenlace en vilo. La huelga de hambre de los presos políticos mapuche ha constituido una primera prueba para la política indigenista que el gobierno de la derecha liderada por Sebastián Piñera pretende llevar a cabo. En tanto, el *newen* (fuerza) de la movilización nacional e internacional en apoyo a los huelguistas parece dar cuenta de una nueva sensibilidad y conciencia frente al pueblo mapuche y a la deuda histórica que el Estado chileno y la sociedad nacional mantienen con ellos. No obstante, una añeja historia de atropellos ha hecho que 14 mapuche decidan seguir arriesgando su vida por defender lo que ellos denuncian como demandas de fondo, cuestionando pero respetando, los alcances de los acuerdos pactados por 23 de sus hermanos.

Bolivia en el nudo de sus contradicciones

Rosa Rojas, La Paz, Bolivia. Luego de las victorias electoral, militar y política del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales Ayma sobre la oposición (entre 2006 y 2009), que cerraron el ciclo de la crisis estatal en Bolivia en las elecciones del pasado 4 de abril, el país está construyendo, según el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, “un Estado plurinacional, una economía social comunitaria y un proceso de descentralización del poder bajo la forma de las autonomías departamentales, indígenas y regionales. Un Estado complejo”.

En posteriores intervenciones y conferencias de prensa, García Linera ha detallado que una vez consolidado el poder político, ahora el proceso de cambio avanza hacia la industrialización de los recursos naturales para apuntalar el poder económico y para romper con el viejo esquema de que Bolivia sea solamente exportadora de materias primas. Para ello no se vale de las recetas de organismos internacionales, sino de un modelo económico boliviano que dinamiza la economía interna con bonos para los escolares, los adultos mayores y las mujeres gestantes.

En los primeros cuatro años de gobierno del MAS, García Linera indica que la economía boliviana creció más que en las últimas tres décadas, a un promedio de 5,2 por ciento desde el comienzo del gobierno en 2006 y destacó que de 2006 a 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia subió de 9 mil millones de dólares a 17 mil millones, mientras que las exportaciones aumentaron de 2 mil 700 millones a 5 mil 300 millones de dólares, las reservas internacionales se acercan a 9 mil millones de dólares y se redujo la pobreza extrema en ocho puntos en tres años.

No obstante, análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) señalan que el país está cada vez más atado a la explotación de las materias primas, ya que en el incremento a 5 mil 300 millones de dólares de las exportaciones adquieren creciente importancia los sectores extractivos de hidrocarburos y la minería, que pasó de 47 por ciento en 1988, a un 80 por ciento del valor de las exportaciones.

Entre el 2004 y 2005, el crecimiento del sector de hidrocarburos explicó cerca de 25 por ciento del crecimiento económico del país, y en 2008 el crecimiento del sector minero explicó casi 40 por ciento del crecimiento económico. Todo eso explica también que se

pudo pasar de un déficit fiscal casi crónico a un superávit fiscal, sostiene el CEDLA.

Entre los riesgos del boom del gas sobre la economía nacional la ONG advierte la volatilidad de los ingresos fiscales por lo inestable del precio internacional del petróleo; la creciente explotación de recursos naturales no renovables; la necesidad de fuertes inversiones, que llevan por un lado a contratar deuda externa “a veces en

tanto de lo que se exporta actualmente. La escasez de gas natural para la industria nacional llevó a que en septiembre se iniciara la importación de 20 mil toneladas de cemento, pese a que la industria cementera tiene capacidad instalada para incrementar su actual producción.

Hay también la advertencia de que los pasivos medioambientales son crecientes. Muchos de los daños ocasionados por la explotación de las industrias



FIESTA DEL NAZAREÑO. CASTRO, CHILE. FOTO: MARIANA MATTHEWS

Los pasivos medioambientales son crecientes. Muchos de los daños ocasionados por la explotación de las industrias extractivas son permanentes e irreversibles.

condiciones poco transparentes”, y a otorgar mayores concesiones económicas y fiscales para las empresas transnacionales.

Por otra parte, expertos del CEDLA advierten que la falta de planeación en la industria de los hidrocarburos está llevando a que en aras de exportar gas a Brasil, Argentina y nuevos mercados como Paraguay, se descuide la atención al mercado nacional, que requiere otro

extractivas “son permanentes e irreversibles”, añade CEDLA.

Justamente buena parte de los conflictos sociales con pueblos indígenas del Oriente se deben a la actividad de las transnacionales petroleras, por un lado, y por otro, grandes problemas ambientales en departamentos tradicionalmente mineros como Oruro y Potosí, se deben a la actividad minera, grande o pequeña.

El gobierno tiene, además, problemas de gestión: en marzo, después de una evaluación del desempeño gubernamental con sus ministros, el presidente Morales se manifestó preocupado porque en el primer trimestre del año se registró una ejecución presupuestaria de apenas 6 por ciento, reveló entonces el vocero político del oficialismo, Jorge Silva.

El 23 de septiembre, el ministro de

Obras Públicas, Walter Delgadillo, informó que la ejecución presupuestaria en inversión pública, a ocho meses y medio de gestión, se encontraba entre un 40 y 49 por ciento, si bien estimó que en tres meses se cumpliría con el 100 por ciento, “ya que de 2 mil 200 millones de dólares de inversión, más de 40 por ciento se va en hidrocarburos, minería, industrialización”.

Está también el problema del narcotráfico. Álvaro García admitió que los recursos que éste inyecta a la economía de Bolivia están entre los 300 y 700 millones de dólares; rechazó que el crecimiento económico de los últimos años en el país, pese a la crisis internacional, se deba a esa actividad ilegal, pues esa cifra sólo representa entre el 1,5 por ciento y el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

El primero de octubre, el presidente Morales admitió: “Quiero ser muy sincero: lo que no estamos pudiendo arrancar es la industrialización del gas y la petroquímica”, dijo, responsabilizando de ello a la falta de “acompañamiento” de los expertos en hidrocarburos bolivianos para impulsar ese proceso, ya que, apuntó, prefieren ganar miles de dólares mensuales trabajando para las transnacionales.

Sin embargo, el mandatario obvió que el retraso de más de dos años en la planeada construcción de una planta separadora de líquidos, se debe a la presunta corrupción de un hombre muy cercano a él, Santos Ramírez, ex director de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, quien está preso acusado de irregularidades en la contratación de una empresa para ello.

La conflictividad social, según información de la Fundación Milenio, es ascendente, con un promedio en la gestión de Morales (2006 agosto de 2010) de 49,4 conflictos al mes, cifra que prácticamente duplica el registro histórico desde 1970.

El gobierno de Morales sobrepasó el récord de eventos conflictivos que tenía el gobierno de Hernán Siles Suazo en octubre de 1984, con 93 conflictos en un mes, en dos ocasiones: en marzo de 2009, con 95, y en mayo de 2010, con 117. A diferencia de antes, que había un mecanismo centralizador de los conflictos, como la Central Obrera Boliviana, ahora las movilizaciones son “fragmentadas, socialmente dispersas y políticamente desarticuladas” y aunque no ponen en riesgo la estabilidad política, “en conjunto están limitando severamente la capacidad de gestión del gobierno”, señala el informe.



NIJOS DE LOS PESCADORES ESPERANDO EN EL PUERTO. PORTEIR, CHILE. FOTO: PATRICK BOLLER

Paraguay, puerta trasera de la Amazonia

Durante años Paraguay fue el país más desconocido para el resto de América Latina. Tal vez a sus vecinos Bolivia, Argentina y Brasil les llegaba el rumor de lo que ocurría tras los portones de esa interminable hacienda donde la mayoría de la población hablaba guaraní y era mantenida en esclavitud disfrazada por la élite criolla de “los colorados”, el partido de una abyecta y “digna” oligarquía local, con el dictador Stroessner a la cabeza.

Se hablaba del trasiego con la inmensa selva, para sacar madera y oro de otras regiones sin que fuera tan notorio el movimiento, del tráfico con bebés indígenas, con especies animales de exportación y con todo tipo de mercaderías lícitas e ilícitas que le abrieron una puerta trasera a la Amazonia.

Hoy Paraguay es la tercera zona de libre comercio más importante del mundo después de Miami o Hong Kong. Su tráfico fronterizo y su sector financiero le dan fama de ser “la principal economía en expansión de la región” y un cruce de caminos de insondables brechas. Las torrentadas de los ríos Paraguay y Paraná forman la segunda cuenca más importante de Sudamérica después del Amazonas. Aquí se hallan Itaipú, la hidroeléctrica en operación más grande del mundo, y la “Entidad Binacional Yaciretá”, enorme represa cuya operación inundó 100 mil hectáreas y 200 islas, desplazó a más de 40 mil personas, produjo unos 80 mil “desaparecidos económicos” [categoría que engloba a todos aquellos que perdieron sus modos de vida y subsistencia] y provocó acusaciones de gran corrupción y pésima planeación.

El desplazamiento ocurre sobre todo por los monocultivos, que sin miramientos promueven la llamada Hidrovía Paraguay-Paraná,

megaproyecto que consiste, como afirma la investigadora Elba Stancich, en “hacer navegables los 3 400 kilómetros de río las 24 horas, los 365 días, para ‘convoys’ o ‘trenes’ de 20 barcazas o más”, violentando (con su escala de operación y de “remodelación” del ecosistema) todas las relaciones de una vasta región para servir a su masivo modelo agroindustrial que tan sólo en lo tocante a la soya representa 42 por ciento de las exportaciones paraguayas.

La élite soyera, que opera en una región que abarca partes de Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay, territorio conocido como “república de la soya”, es el feudo transnacional de una burguesía finquera derechista que ha sembrado terror y soya mediante la acción violenta de guardias armadas, escuadrones de la muerte y “comisiones de seguridad ciudadana” que imponen a los pobladores sus monocultivos mecanizados, acallando la disidencia con el asesinato, la desaparición y el encarcelamiento. “A estas organizaciones”, dice Javiera Rullí en *La paramilitarización del campo con la expansión de la soya* (2008), “que actúan como instrumento de represión y control social en los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les acusa de realizar prácticas totalmente ilegales: desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la libertad de expresión y religión, contra quienes no aceptan su orden”.

Si apenas en los noventa algunos aventureros brasileños introdujeron los primeros cultivos de soya en Paraguay, ahora la élite finquera y los descendientes “brasiguayos” de los primeros colonos tienen plantadas con soya más de 2,5 millones de hectáreas desplazando la producción de alimentos básicos como leche, arroz, maíz, papa y lenteja, destruyeron por lo menos 2 millones de hectáreas de

bosque tan sólo en Paraguay, y le siguen arrebatando tierras a las comunidades. Van más de cien líderes asesinados desde 1989 y tan sólo en 2004 fueron detenidas por lo menos mil 156 personas (de una población total paraguaya de 2,3 millones). Más de cien mil personas han sido expulsadas de sus tierras.

Desde 2000, por lo menos, documenta Rullí, la introducción de la soya transgénica, ligada a la enorme industria de la carne con producción intensiva en confinamiento, produjo “un aumento vertiginoso de campesinos sin tierra debido a que esta ola de expansión ocupa sobre todo tierras campesinas, en un momento en que se agotaron las tierras públicas”. Las comunidades que viven rodeadas de monocultivos de soya son violentadas. “La práctica del ‘guardia armado’, en los latifundios que rodean a la comunidad, o los guardias del productor sojero que alquila tierras en la comunidad, conllevan la paramilitarización del campo, la corrupción de las fuerzas del orden y el acoso a los sectores organizados de las comunidades”. El modelo sojero implica también la “muerte por envenenamiento, intoxicación masiva, expulsión ‘legal’ de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial”.

Con la llegada de Fernando Lugo a la presidencia, mucha gente ha confiado en un gobierno que en muchos contextos parece dispuesto a jugársela con un cambio, pero que enfrenta a una temible élite ligada a los agronegocios, a las empresas de energía, a los terratenientes, al imperio sojero, a las corporaciones alimentarias y sus cadenas de transporte y supermercados. Éstos resienten las acciones del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas (Senave) que “por primera vez en su historia, está cumpliendo cabalmente los mandatos que la normativa ambiental vigente le designan, al proceder a la destrucción de los cultivos de maíz transgénico en el departamento de Alto Paraná y al anunciar que hay todo un calendario que se hará cumplir en las zonas donde existan esos cultivos”, como afirma en un comunicado la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri). El comunicado tiene como fin la defensa del Senave y de su titular, Miguel Lovera, que han recibido amenazas y son objeto de una campaña de intimidación y difamación por parte de personajes ligados al agronegocio “porque no están acostumbrados a tratar con la justicia, salvo cuando es para sobornar o fomentar la corrupción de los funcionarios públicos, siempre en defensa de sus propios intereses”.

En ese clima de polémica en el que amplios sectores del país rechazan los transgénicos, y los gremios de terratenientes vociferan contra la prohibición de los mismos y por la intervención “exagerada” del Senave, que procedieron a destruir sembradíos de maíz transgénico, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por decisión de su titular Enzo Cardozo, resolvió abrir la experimentación con maíz transgénico por considerarlo “de interés estratégico”. Según esta fórmula, utilizada también para abrir la siembra en otros países del continente, notablemente México donde también hay una fiera resistencia a los transgénicos, son sólo “ensayos regulados”. En realidad son un contragolpe directo de la poderosa agroindustria que no se consuela con un gobierno que quisiera emprender cambios, tejer alianzas y hallar resquicios para estallar las herrumbrosas estructuras de dominación del Paraguay de los ricos.

Ramón Vera Herrera

Claroscuros de Lula

A los indios les quedó a deber

Joana Moncau y Spensy Pimentel

En tres meses, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva concluirá ocho años de gobierno en los que se consagró como el más popular presidente en la historia de Brasil, con índices de aprobación cercanos al 80 por ciento y una probable victoria electoral (aún en veremos) de su candidata a sucederlo, Dilma Rousseff. Sin embargo, para un grupo minoritario de brasileños, cerca de un millón de personas, Lula resultó una decepción impensable años atrás. Entre los pueblos indígenas, Lula quedó a la baja. “Ha probado ser el enemigo número uno de los indios”, llegó a decir recientemente el cacique Megaron, líder de los kayapó, uno de los pueblos indígenas más conocidos en el exterior.

Esta postura no es unánime, ciertamente. Entre los hechos positivos de los últimos años está, por ejemplo, la homologación del Territorio Indígena Raposa Serra do Sol, con 1.7 millones de hectáreas en Roraima, al extremo norte del país. Al cabo de una larga disputa judicial, las acciones contra esa demarcación fueron superadas en el Supremo Tribunal Federal en 2008, si bien carga con una serie de condicionantes aún en querrela legal.

Entre los hechos que unos aprueban y otros rechazan está la reestructuración del órgano indigenista oficial, la Funai (Fundación Nacional del Indio), que tiene más funcionarios y recursos, pero sigue cerrada a la participación de los propios indígenas. La creación reciente de una Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) es considerada un triunfo, después de años de violentas protestas y denuncias de corrupción en el sector, hasta este año dominado por el PMDB, partido de derecha que ha sido gran aliado de Lula en el parlamento.

Por lo demás, queda una serie de resultados negativos. El más grave es que, mientras se triunfa en la demarcación de tierras en la Amazonia, donde están hoy el 98 por ciento de las 107.5 millones de hectáreas declaradas tierra indígena (cerca del 12.5 por ciento del territorio nacional), los indígenas del centro-sur y el Nordeste del país (45.8 por ciento del total de la población indígena, sin contar los que viven en

las ciudades) mantienen una lucha férrea e inconclusa por la recuperación de sus territorios.

La demarcación de tierras fuera de la Amazonia, en las partes donde la presencia no indígena es más antigua y más densa, implica enormes costos políticos y financieros. Lula no consiguió superar el poder de los agronegocios en esas zonas, prefiriendo su alianza con ese sector de la economía, que produce buena parte del superávit financiero del país en sus exportaciones.

El resultado más espantoso de esa impotencia puede verse en el estado de Mato Grosso do Sul, frontera con Paraguay y Bolivia, que alberga a la segunda mayor población indígena de Brasil, unas 70 mil personas. La peor parte se la llevan los guaraní kaiowá, 45 mil personas en 42 mil hectáreas. Confinados en pequeñas ínsulas de tierra, cercados por las plantaciones de soja, cañas, pastizales y pistoleros por todos lados, los guaraní kaiowá viven en una situación de violencia generalizada, con una tasa de asesinatos semejante a las periferias de las grandes ciudades.

También tienen una de las tasas más altas de suicidio en el planeta (más de cien por cien mil habitantes, sobre todo entre los jóvenes). Allí ya no hay bosques, ni ríos limpios, ni espacios que cultivar. La mayoría de las familias depende para sobrevivir de las donaciones de alimento del gobierno. Relatorías recientes de la ONU, Amnistía Internacional y Survival denuncian su situación como una de las más graves de las Américas. En ocho años de gobierno, Lula homologó tres terrenos para ese pueblo, pero dos fueron embargados por el aparato judicial.

Además de las omisiones gubernamentales, estos indígenas no están protegidos por la selva amazónica, y sí expuestos al racismo y la persecución por parte de los aliados a los intereses por esas tierras, como jueces y policías. En Bahía encontramos el ejemplo más grave, con los tupinambá, pueblo que pasó muchos años eludiendo su identidad indígena, pero que en la última década desencadenó un fuerte movimiento por la recuperación de sus tierras. Allí, la Policía Federal, subordinada de Lula, es acusada de emplear prisiones ilegales y

tortura. A los líderes del movimiento indígena se les procesa por delitos como “perturbación del orden” o “formación de bandas”.

Tampoco es fácil la vida para los pueblos indígenas en la región amazónica, aunque la mayoría de las comunidades tienen ya garantizadas sus tierras. En las regiones de avanzada del agronegocio, como Mato Grosso, los manantiales son contaminados por agrotóxicos, mientras los ríos son absorbidos por las plantaciones puestas sin ningún criterio en sus riberas. Al mismo tiempo, la agroindustria propicia la construcción de pequeñas centrales eléctricas que dañan el equilibrio ecológico y amenazan la subsistencia de las aldeas.

El mismo gobierno federal, argumentado una preocupación por el desarrollo económico de la nación que muchas veces sirve de fachada a los intereses privados (casi siempre ligados a los políticos de derecha que Lula ha cobijado), patrocina grandes plantas eléctricas en ríos amazónicos como Madeira, Tapajós y, principalmente Xingu, por medio de su Programa para la Aceleración del Crecimiento. En este contexto surge la crítica del cacique Megaron.

El caso más reciente y polémico es la hidroeléctrica de Belo Monte, en el Xingu. La planta ya estaba proyectada desde la dictadura militar, pero sólo un gobernante con respaldo popular como Lula fue capaz de vencer la resistencia y tirarla a la basura. Su construcción, calculada en 10 mil millones de dólares, podría iniciar este mismo año.

A los indígenas se les trata como una minoría a la que no puede permitirse obstruir un desarrollo del país aliado de los intereses extranjeros. El hecho es que Belo Monte representa una empresa polémica también entre los especialistas, quienes han criticado el proyecto. A causa de las fuertes variaciones en el flujo fluvial en la Amazonia, la planta deberá generar la mayor parte del año bastante menos energía de la prometida por el gobierno (4 500 MW, y no 11 mil MW). Además, los especialistas acusan al gobierno de menospreciar los impactos ambientales.

Las acciones de inclusión social, un punto importante en la popularidad de Lula, representan también la contradicción profunda que emana de su gobierno en relación con las poblaciones tradicionales: en vez de proteger los ríos, realiza obras de saneamiento en las aldeas; en vez de otorgar tierra para cultivar, da ayuda alimentaria y asistencia social. En vez de reconocer la autonomía y la autodeterminación, acude al clientelismo y ofrece a los pueblos indios una ciudadanía de segunda clase.

Los autores son editores de la *Especial Indígena* número 1, de la revista *Caros Amigos*, que aparecerá próximamente en Brasil.



PINTURA DE RAY TROLL

El movimiento indígena en Ecuador

Antes y después del golpe

Pasados los momentos álgidos de la crisis política e institucional que se vivió en Ecuador, en una primera apariencia por la insubordinación de un grupo de la Policía Nacional del cuartel más grande de Quito, que rápidamente tomó visos de una intentona de golpe de Estado y culminó con la declaratoria de estado de sitio, se vislumbra el reacomodo de los movimientos sociales, fundamentalmente el indígena, que claramente condenan a la derecha golpista que está detrás del conflicto, pero que de ninguna manera le extienden un cheque en blanco al presidente Rafael Correa, que ha dado demasiados guiños a la derecha hegemónica que prácticamente cogobierna, triunfante, con el proyecto de la “revolución ciudadana” impulsada por su gobierno.

En el contexto anterior al levantamiento, impulsado desde la derecha se aprobó una serie de leyes en las que la Asamblea (parlamento), con mayoría de Alianza País, ha jugado un tris-te papel de entrega al presidente, quien con sus vetos ha modificado el espíritu y la esencia de muchas leyes, como las de Aguas y Soberanía Alimentaria, que de cualquier forma estaban viciadas de ambivalencias y excepciones. Esto

generó enfrentamientos con todos los frentes posibles: indígenas, universidades (por la Ley de Educación Superior), transportistas (Ley de Tránsito), maestros (Ley de Educación), entre otros, y finalmente, con los servidores públicos, entre ellos la policía. Lucio Gutiérrez, el advenedizo y gris militar que llegó a la presidencia tras pactar con el entonces poderoso movimiento indígena de Ecuador, para después romperlo y ponerse a las órdenes de Washington, aparece como entonces como un factor útil ¿a quién?

Según fuentes consultadas por *Ojarasca* en la capital ecuatoriana, la alianza con los grupos de la derecha ha servido a Correa “para consolidar sus bases de poder político y económico. No podía ser más perfecta su figura de aparente tinte moderado que gobierna con un discurso ‘socialista’ y con políticas liberales”.

Los hechos del 30 de septiembre se produjeron “en medio de un enrarecido clima político marcado por los viajes de la oposición partidaria a Washington para ‘denunciar la dictadura de Correa’, y la persistencia, por otro lado, de una confrontación con las organizaciones sociales y de trabajadores”, según consigna a su vez David Suárez Changuan, de la Universidad Central de Quito y colaborador

del Observatorio por los Derechos Humanos en Ecuador (revista virtual *Desinformémonos*, número 12, octubre).

Apenas una semana antes de los actos anticonstitucionales perpetrados en Quito, condenados en su momento por todas las organizaciones sociales que desde la izquierda se oponen a las políticas neoliberales del actual gobierno, se reafirmó, por ejemplo, la confrontación entre los movimientos que se oponen a la minería a gran escala y el presidente Correa. En una declaración conjunta, las nacionalidades y pueblos del sur reunidos en Gualaquiza el 17 de septiembre dijeron: “Frente a la continua criminalización de la lucha y la persecución judicial contra los dirigentes de las organizaciones sociales y populares, como es el caso de Pepe Acacho, presidente de la FICSH, quien junto con otros 30 dirigentes han sido acusados del delito de sabotaje y terrorismo por participar en las protestas por la defensa de la soberanía y la naturaleza, y frente al violento e injustificable operativo policial de desalojo a pequeños mineros en la zona de Conguimi (Kenkuim) del cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, que interrumpió un diálogo en curso que estaba dando salidas a los problemas generados por la pequeña minería informal, en gran medida controlada por ciertos sectores de poder económico de la provincia, y causante de graves daños socio ambientales, nos preguntamos qué pretende el gobierno nacional. ¿Acaso seguir limpiando de obstáculos el impulso de la actividad minera de gran escala controlada por empresas transnacionales, generando un ambiente de terror y zozobra?”.

El mismo 30 de septiembre, señala Suárez Changuan, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) se preguntaba:

“¿Cómo apoyar a un gobierno que ha recrudecido la represión y persecución contra líderes antimineros en Azuay? ¿Cómo ponerse de parte de un gobierno que sistemáticamente ha desmantelado los espacios conquistados por los indígenas para mantener autonomía en educación, salud, desarrollo social, etcétera? ¿Hay efectivamente un golpe de Estado? ¿Dónde se ha configurado, quien lo está llevando adelante? ¿Cuáles son los intereses más importantes de los pueblos y de los trabajadores en el país?”.

Finalmente, en el debate la Conaie sostuvo una posición clara: “Aunque la intransigencia de Correa y su actitud prepotente frente al diálogo con las organizaciones sociales haya provocado una situación de descontento de los de abajo que están organizados, lo cierto es que el movimiento de tropas en la policía y los militares no responde a la dinámica de abajo”, apunta Suárez Changuan. “No hay ninguna ilusión posible con un movimiento que persigue demostrar que la extrema derecha existe y goza de buena salud en partes importantes del aparato estatal. La Conaie decide condenar el golpe y define que la única forma de defender la democracia es hacer la revolución de manera profunda y verdadera. Llama al gobierno a resolver el diálogo pendiente con los trabajadores y organizaciones sociales”.

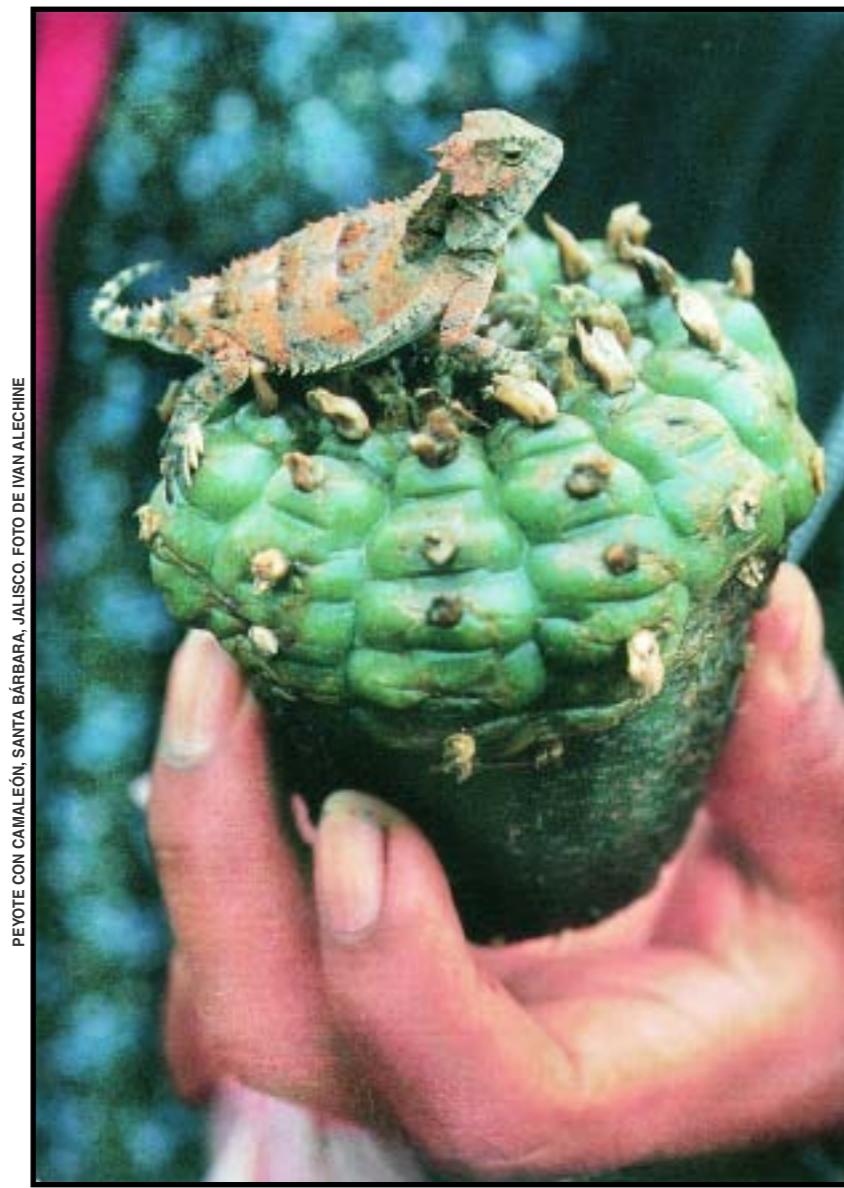
Seis días después, el 6 de octubre, ya con los ánimos en calma pero aún en estado de sitio, la Conaie y el Bloque Pachakutik advierten “que nunca hubo ningún intento de golpe de Estado, mucho menos un secuestro (del presidente Correa), sino un hecho que responde a una desacertada conducción política del gobierno que trae el descontento popular, por las permanentes agresiones, discriminación y violaciones de los derechos humanos consagrados en la norma constitucional”.

Ante “los pronunciamientos realizados en los últimos días sobre los supuestos aportes de USAID-NED para las organizaciones indígenas”, el presidente de la Conaie, Marlon Santi, expuso en un comunicado: “Rechazamos categóricamente que la Conaie, el Movimiento Político Pachakutik, los pueblos y nacionalidades tengan relación alguna con el organismo de USAID, NED antes, hoy ni nunca”.

La vinculación del movimiento indígena con la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), es la primera de una serie de acusaciones que, se prevé, se lancen desde el gobierno contra la resistencia a las políticas neoliberales. “Por el contrario conocemos que este organismo financia los ‘programas sociales’ de este Gobierno, como el Socio Bosque; eso sí es condenable”, declaró la Conaie.

Qué sigue, se pregunta Suárez Changuan: “¿Clausurar las arcas del diálogo frente a todos los que condenamos el golpe pero nos tornamos escépticos frente a las banderas verdes y el ánimo de epopeya que no reemplazan la necesidad de transformaciones profundas? ¿Habrá caería de brujas, buscando golpistas en los movimientos sociales, en los contradictores de izquierda fundamentados, los ecologistas y ambientalistas? O habrá diálogo y reconsideración para fundar —al ver la debilidad de la ocupación temporal de un Estado— esa otra política que sólo puede arraigar en los movimientos que nacen de la profundidad. De la necesidad de un socialismo que no precisa del Estado para defender la lucha por lo sustancial, la sociedad autogestionaria de los productores directos”.

Ojarasca



PEVOTE CON CAMALEÓN, SANTA BARBARA, JALISCO. FOTO DE IVAN ALECHINE

Tu voz respalda mi porvenir

Juan Álvarez

En memoria de José Antonio Reyes Matamoros

La niebla forma tu cuerpo cuando voy por la vereda a probar mis brazos con el hacha: el filo del rocío es delgado, parece el brillo de tus ojos y por tus ojos juro que algún día derrotaremos a la miseria. Pequeña golondrina del tiempo, me eclipsas con tu cuerpo hermoso, bebiendo en cada gota la escarcha de tu luz es tierno el rocío que toca tierra. Entre mis venas el himno del amor, tu suspiro de estrella naciente, de piel maciza y fuerte, que llena de valentía mi corazón. Niña luna te mueves con mirada silenciosa, tu voz resguarda mi porvenir.

**

La orilla del aire te toca, el cúmulo de nubes te canta, en la luna estalla tu aroma: hagamos de esta herencia tierra amorosa. Mujer, la lluvia abunda en tus manos de ixim; de palabras ancestrales refulge el relámpago por ti. Tienes la esencia del sur, posees el silencio de las estrellas, dueña de mi pasión más pura. Tu mano destroza la hierba, y tu sangre fluye sorprendida multiplicando la nación del maíz.

**

Ave que brilla entre notas, elogio del viento tus pechos de aurora el alba nace en tu alegría; somos eternos labrando la noche. Te necesito como el día para que al alejarte me dejes tu silueta, con el gesto de tu boca crecerá este horizonte de pinabetal. El aire suena afuera buscando tu aliento bajo el asombro de lo eterno, bebe la noche mi sangre, cada segundo espero que bordes mi nombre. El brío del tiempo lo vi por tus ojos; percibí el canto de tu astro: dejas tu palabra en mi boca.

Ya spas abak'etal te tokal k'alal xbon ta tutin be ta spijutesel ta echej te k'ab: jaynax yej te ts'ujul, jich bit'il slemlonil sk'aal asit ya kal ta asit te ya jtsaltik jun k'ajk'al te me'bajil. Tutin yulich k'ajk'al, ya st'upon sit st'ujbilal te abak'etal, ta t'ulut'ul ya kuch' ya'lel te axojobil uninax sts'ujul stek'an sba ta balumil. Ta jchial te sk'ayojil k'anjel, a'ch'il ek' te sjik'el awo'tan, yijuben anujkulel sok tulan, te snojtes ta tulanil te ko'tan. U ach'ix ya tij abaj ta ch'aben k'elujel, ya skanantaybon te jkuxlejtal.

**

Ya spikat te sti'il ik, te sbak'etal tokal ya sk'ayintayta, ta U ya xt'om awik: jpastik te jmajtantik ta bujts'an k'anjel balumil. Ja'al ants, ya s-uts'ub ta ak'ab te ixime; ta sk'op jme'tatik xlemlon ta atojol te chawuke. Slekil xk'exab k'inalat, jawich'o te xch'aben ek'etik, yajwal sbuts' xk'ixinul jbak'etal.

Ya stujtun ak'ab te ja'mal, yanax ta beel te ach'ich'el ta smuk'ubtesel te slumalil ixim.

**

Smutil ja'mal te ya xtil ta k'ayoj, sk'intayel ik' te sakubel k'inal achu' te xojob ya xch'iknaj ta atsee; sbajtelotik ta ts'unel te ajk'ubale. Ya jk'anat bit'il k'ajk'al yu'un k'alal ya xbat ya wijk'atabon te anok'etal, sok yik'al aweje yame xch'ij ta steklejal slumal k'isis. Te ik' ya xk'opoj ta wuera ta slejel sjik'el awo'tan ta yanil t'ujbil bajtelil, te jch'ich'el ya yuch' te ajk'ubal, ta ts'inits'in ya jmalij te ya-ajalbon te jbi'il. Te xojobil k'ajk'al lakil ta sit; la-kaybey sk'ayojil te abak'etal: ta kej awijk'atay te ak'ope.

Juan Álvarez Pérez nació en el paraje Pinabetal (Chilón, Chiapas) en 1973. Su idioma original es el tseltal. Participó en las colecciones colectivas *Del caos a la palabra*, 2001; *Distintos colores de la tierra*, 2001; *Delirio de sombra*, 2004, y *Vapor de luz (Sab xojob)*, 2007. Su primer libro fue *Así canta la muerte (Jich ya xk'ayin te lajele)*, 2006. Estos poemas pertenecen a la serie "Coqueteo" de *Se ha cansado el silencio (Lubenix te ch'aben)*, libro que ganó el certamen continental Canto de América este año.



ESTANCIA CERCA DE CERRO SOMBRERO, CHILE. FOTO: PATRICK BOLLEN

veredas

Sexta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

La articulación de las luchas comunitarias

Octavio Rosas Landa

crítica sobre el uso de sus territorios y recursos comunitarios.

Por ello, una de las principales reivindicaciones de la Asamblea consiste en la demanda de que en México se realice un diagnóstico que haga visibles, una por una, las afectaciones ambientales y a la salud humana derivadas de más de 15 años de libre comercio y se

demandas y acciones para que formen parte de un movimiento social más amplio, dirigido a detener y revertir la destrucción general del país. La lucha de la ANAA tiene como ejes el respeto común a la autonomía de las luchas locales y el apoyo solidario y pacífico de todos sus participantes a la defensa de causas comunes de escala nacional.

Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), que se realizará en Cancún a finales de noviembre y principios de diciembre.

En esta sexta Asamblea, realizada en el contexto de una creciente militarización del país, de descomposición generalizada de las instancias de representación política y del sistema jurídico, de criminalización despiadada de las luchas sociales y de agresión militar y paramilitar en Oaxaca, el ánimo de los casi mil 200 participantes de 13 estados del país (junto con los asistentes de organizaciones nacionales como La Vía Campesina, el Movimiento Urbano Popular, el Movimiento de Liberación Nacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Red en Defensa del Maíz y observadores de otros países) fue avanzar en la consolidación de un amplio movimiento social. Tiene que ser un movimiento que integre, dentro de las agendas de cada una de las luchas, el reconocimiento de la problemática ambiental que sufre todo el país y las alternativas autogestionarias que aplican las comunidades locales indígenas, campesinas y urbanas, para reconstruir una identidad común. Esto, no sólo como afectados ambientales, sino como portadores de novedosas formas comunitarias de gestión del territorio y de la riqueza social de la que el capital y el Estado pretenden despojarnos mediante su destrucción y privatización.

Por ello, la ANAA decidió, en Magdalena Ocotlán, sumarse a la iniciativa propuesta por La Vía Campesina de realizar, a finales de noviembre, una serie de caravanas de observación, visibilización y denuncia de la verdadera política ambiental del gobierno mexicano, en el marco de la COP16 de Cancún. Igualmente a las movilizaciones que esa red internacional realizará para exigir el fin de la simulación oficial frente a la crisis climática y ambiental, el reconocimiento de que los campesinos son los que verdaderamente enfrían el planeta, y exigir el fin de los privilegios fiscales, jurídicos y políticos a las empresas transnacionales que, además de haber provocado la crisis actual, pretenden ahora vendernos sus falsas soluciones.

Octavio Rosas Landa es parte del Consejo Nacional de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales



VIRGINIA CHONQUEL, ÚLTIMA SOBREVIVIENTE DE LA TRIBU ONA, RIO GRANDE, ARGENTINA. FOTO: PATRICK BOLLEN

Ados años de su fundación, el 31 de agosto de 2008, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) se reunió, por sexta ocasión, los días 11 y 12 de septiembre, en Magdalena Ocotlán, Oaxaca (comunidad afectada, junto con San José del Progreso, Maguey Largo y El Cuajilote, entre otras, por el proyecto de la transnacional minera canadiense Fortuna Silver Mines). Central para la reunión fue reflexionar sobre la necesidad de fortalecerse como espacio de resistencia y lucha comunitaria contra las innumerables formas que ha adoptado la devastación social y ambiental de México a manos de las sucesivas administraciones federales, estatales e incluso municipales. Estas, por casi 30 años, han establecido como elemento central de su política económica, un esquema de desregulación ambiental orientado a favorecer las inversiones privadas (nacionales y extranjeras) en proyectos mineros, carreteros, de grandes presas y trasvases, de urbanización salvaje, de gestión de los residuos y basura, y de privatización de los recursos naturales, servicios públicos e infraestructuras.

Tal desregulación no sólo les ha generado enormes ganancias a las empresas y a los políticos beneficiarios. Ya produjo innumerables crisis por agotamiento de los recursos hídricos, forestales, de biodiversidad o agrícolas —por la contaminación y sobreexplotación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, por la incapacidad, provocada por el propio Estado, para enfrentar los cada vez más recurrentes desastres climáticos y por la inocultable destrucción de la salud de la población mexicana, expresada en las epidemias de influenza porcina, diabetes, obesidad y enfermedades raras que están asolando al conjunto de los habitantes del país.

En la ANAA convergen distintas luchas socio-ambientales locales, regionales y nacionales que enfrentan un creciente grado de simulación oficial. Así, el gobierno declara por un lado en todos los espacios su "compromiso" con la preservación del ambiente, mientras que, por el otro, difama, desconoce, golpea y criminaliza todo intento de crítica y defensa colectiva de los derechos de los pueblos a su autonomía y a una toma de decisiones informada y verdaderamente demo-

reconozca, dentro y fuera del país, la real situación de colapso ambiental en México. Igualmente, la Asamblea trabaja desde su creación en la articulación regional de las luchas locales con el fin de sacarlas de la invisibilidad. Trabaja fortaleciendo (a través de un proceso de autoformación) su propia comprensión sobre la conexión entre cada una de las luchas locales, enfatizando la importancia de alternativas autogestionarias y convergentes. Es vital demostrar la pertinencia de sus

Entre ellas la exigencia de que se prohíba en México el cultivo de maíz transgénico; la denuncia contra la pretensión del gobierno mexicano de sacar provecho de la crisis climática mundial para promover, como supuestos "Mecanismos de Desarrollo Limpio", la instalación de granjas industriales en todo el territorio nacional; o bien la oportunista aplicación del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), en la 16 Conferencia de las Partes del

Avaricia minera, trasfondo en San Juan Copala

Andrés Barreda

La agresión de los paramilitares de Ubisort y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo, atender un punto que reilumina la interpretación: los yacimientos mineros de Juxtaluaca, el pequeño municipio donde el gobierno de Oaxaca decidió, desde 1948, encerrar y castigar al ancestral Chumaa de San Juan Copala, arrebatándole a esta asamblea territorial de los triquis su reconocimiento como municipio soberano de la entidad.

Aunque con tradición minera, Oaxaca y el sureste de México eran consideradas regiones de baja productividad minera. Pero la enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.

Con estos criterios, ahora 70 por ciento del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener "grandes yacimientos".

No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan.

Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada,

para luego lixiviarlas con grandes montes de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.

Con esta nueva sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios.

En México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005, y aplican políticas económicas que le entregan nuestras rocas a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.

El sureste mexicano adquirió así una importancia inusitada. Sin considerar exhaustiva la información del oficial Consejo de Recursos Minerales (CRM), éste rebela el nuevo significado de Oaxaca, pues la reporta como una de las principales áreas mineras del país. En 2007, el CRM reportaba 4 yacimientos de molibdeno, 5 de mercurio, 6 de níquel, 8 de uranio, 8 de cobalto, 9 de torio, 18 de titanio, 22 de antimonio, 32 de manganeso, 34 de zinc, 51 de cobre, 52 de plomo, 55 de hierro, 192 de oro y 194 de plata: yacimientos simples o polimetálicos concentrados en la Mixteca, los Valles Centrales y la Sierra Sur. De 570 municipios oaxaqueños, 201 poseen yacimientos mineros estratégicos.

Como en África o Colombia, las grandes empresas mineras transnacio-

nales, sobre todo las canadienses, promueven la ingeniería de conflictos en las comunidades, y los desplazamientos y el exterminio en zonas prioritarias para la explotación, hay que repasar la geografía de los asesinatos de líderes comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca.

La virulencia de las empresas mineras en las zonas de su interés que están pobladas es un hecho documentado y cada vez más habitual en Oaxaca: pobladores envenenados en la cuenca alta del río Largo por la extracción de oro en Calpulalpan (Sierra Norte); asedio contra la población y emigración de Loxichas para extraer titanio en la Sierra Sur; diez años de provocaciones constantes en las inmediaciones de

Es prioritario indagar los motivos de los asesinatos comunitarios ocurridos en Oaxaca. Revisar la larga lista de asesinatos políticos fríamente planeados en torno del municipio autónomo de San Juan Copala. Ocurre que en el municipio de Juxtaluaca se localizan once yacimientos de metales importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de hierro, uno de oro, uno de plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de cuatro kilómetros de San Juan Copala.

Si el último yacimiento polimetálico ya se concesionó a alguna empresa privada que todavía nos es desconocida (lo que



Fiesta de la Regaña, Fiesta del Nazareno, Isla Caniuch, Foto: Mariana Matthews

Textitlán y Zaniza, en la Sierra Sur por un descomunal yacimiento de hierro; las recientes provocaciones que padecen los habitantes de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Maguay Largo y el Cuajilote por frenar las minas de oro que se pretenden abrir en Valles Centrales.

es casi seguro por la última reforma a la ley minera), es probable que los empresarios de esta potencial mina a cielo abierto (ubicada en los 17°:09' N y 97°:59' O) procurarán que el ancestral Chumaa (en los 17°:11' N y 97°:57' O) del municipio autónomo de San Juan Copala sea devorado por su correspondiente cráter.

xv aniversario de la comunitaria

No es poco llegar a cumplir 15 años con todo en contra: órdenes de aprehensión, hostigamiento, recrudescimiento de la pobreza en la región, fuerte militarización y falta de recursos para su proyecto, entre muchos otros obstáculos que ha enfrentado durante todo este tiempo la Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. A pesar de tantas dificultades, y por lo mismo con mayor motivo de orgullo, este 15 de octubre los llamados "comunitarios" celebrarán los primeros tres lustros de una de las experiencias autonómicas más notables en el país.

Conformada por los pueblos mixtecos, tlapanecos y nahuas, como respuesta desde abajo a los constantes y violentos actos de delincuencia en la Montaña de Guerrero (asaltos, violaciones sexuales, abigeato, entre otros), en los que las autoridades no intervenían porque en muchos de los casos eran cómplices o antagonistas de los mismos, la Policía Comunitaria de

Guerrero tiene mucho que celebrar, pues hasta los propios gobiernos estatales (todos los que los han perseguido) reconocen que han conseguido disminuir sustancialmente el índice de delincuencia.

Quince años después los retos son otros, ya no sólo se trata de detener a los delincuentes, como se concibió en un principio, ni tampoco sólo de generar un sistema de justicia, como lo diseñaron después, con la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), ahora, como lo anuncian en la convocatoria de su XV aniversario, se proponen "generar encuentro y diálogo entre organizaciones nacionales e internacionales, para visibilizar las luchas y procesos organizativos en materia de seguridad y justicia de los pueblos originarios, entre otros retos.

Un tema fundamental es la construcción de un gobierno autónomo en el que se inserte un sistema de

justicia como el que han construido. Los retos son muchos y se reflejan precisamente en la temática a tratar durante el foro del aniversario (a celebrarse del 13 al 16 de octubre): Seguridad, justicia y reeducación desde los pueblos, la lucha de los pueblos indígenas en la construcción de México; la situación de los derechos humanos en el país y la criminalización de la protesta social; la educación alternativa; los sistemas alternativos de salud; y la defensa del territorio.

La CRAC no se concibe aislada de la problemática nacional ni internacional, por lo que destinarán una mesa al debate de la construcción del poder popular, la participación ciudadana y la democracia. El tema de la mujer es otra de sus preocupaciones, al igual que los medios de comunicación comunitarios y los procesos de consulta.

Gloria Muñoz Ramírez

La defensa de Virikuta

De nueva cuenta (tras miles de veces que los wixaritari se han pronunciado en defensa de Virikuta, o Desierto de Coronado, sin duda uno de los lugares sagrados más importantes de Mesoamérica y Aridoamérica), las comunidades de Waut+a, Tutsipa, Tatei Kie, Tuapurie y Uweni Muyewe que conforman el pueblo wixárika elevan su voz para protestar por las modificaciones a las leyes de minería que sirven en charola de plata los lugares más recónditos de los territorios indígenas a las compañías mineras transnacionales, como es el caso de First Majestic Silver (de origen canadiense) a la cual se le otorgaron 22 concesiones en lugares aledaños a Real de Catorce, que suman 6 mil 326 hectáreas, que abarcan lugares sagrados.

Los daños serían evidentes en manantiales sagrados donde se coleccionan aguas especiales que se encuentran en las cuencas de las vetas de plata que van a explotarse —y que están en peligro de contaminarse con cianuro y desecarse por la enorme cantidad de agua usada por esa industria. Serían 16 centros de población los que saldrían afectados (los cuales pertenecen a 6 eji-

dos) y numerosas localidades que verían afectadas sus fuentes de agua como El mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Santa Cruz de Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado, San Juan de Matanzas y otras, lo que sumaría unas 3 mil 500 personas que resultarían afectadas.

Además, conceder la explotación minera a First Majestic Silver viola el Convenio 169 de la OIT, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos peligrosos, La Ley general de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Ambiental de San Luis Potosí y otras disposiciones, Normas Oficiales Mexicanas y programas de manejo,

además de no haberle sido consultadas estas acciones a ninguna instancia de gestión de los pueblos y comunidades.

Es obvio entonces que el pueblo wixárika en pleno rechaza el proyecto minero de First Majestic Silver y se inconforma por la afectación a uno de los enclaves megadiversos del país que es sin duda un lugar sagrado para toda la humanidad. También expresa profunda preocupación por la contaminación y desecamiento del agua que beben los pobladores del desierto, "y por el incremento de enfermedades respiratorias, gastrointestinales o incluso cáncer debido a los venenos usados en la minería y el efecto de sus residuos tóxicos".

Al final de su comunicado, firmado por autoridades agrarias y tradicionales de todo el pueblo huichol, los wixa-

ritari enfatizan: "Aclaremos que haremos uso de todos los recursos necesarios para detener este devastador proyecto minero, valiéndonos de recursos jurídicos nacionales e internacionales que están a nuestro favor así como acciones de resistencia civil y pacífica que sean necesarias".

Parecería consigna, pero el repunte impresionante de la industria minera en nuestro país va aparejado de un incremento en el acoso en varios frentes a las comunidades indígenas de todo el país y entraña una destrucción mucho mayor que antes, por la renovada voracidad de las empresas, y porque en el siglo XXI, la extracción de las poquísimas reservas minerales que quedan se hace sin miramiento alguno.

Ojarasca



Con la BBC, en el canal de Beagle, Argentina. Foto: Patrick Bollen

En diciembre de 2004 se escuchó por vez primera *La Palabra del Agua*, *Radio Ñomndaa*, engendrada al interior del municipio autónomo de Suljaa' (Xochistlahuaca), habitado por nn'anncue (amuzgos), cuya lengua se conoce precisamente como el ñomndaa, (literalmente, la palabra del agua).

Este proyecto de comunicación comunitaria nace y crece bajo el asedio gubernamental.

Concebida como una radio libre "que no está bajo el servicio de los malos gobiernos, que no está controlada por empresarios ni por caciques, y tampoco al servicio de ningún partido político", esta radio, han señalado sus creadores, "nació para dar fuerza al pueblo, para difundir su palabra, su música y los sonidos de la

montaña, para cuidar y defender nuestro territorio". Y por eso lo persiguen.

El 27 de septiembre, tres de los fundadores del municipio autónomo de Suljaa' y de *Radio Ñomndaa* —Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango— fueron condenados a tres años y dos meses de pri-

sión y al pago de una multa de mil 753 pesos, como presuntos responsables del delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de Narciso García Valtierra, hombre cercano a la temible cacique de la región, Aceadeth Rocha Ramírez.

La Palabra del Agua, señalaron en un comunicado las autoridades de Suljaa, "es una

herramienta que sirve para ayudar a abrir nuestros ojos, ver y escuchar más lejos, para despertar nuestra conciencia. Esta radio nació para fortalecer y acompañar la lucha del pueblo, y es por eso que el gobierno municipal priísta, el gobierno estatal perredista y el gobierno federal panista han agredido y hostigado de muy

diferentes maneras a los compañeros fundadores y del Comité Directivo de *La Palabra del Agua*. Quieren que se apague la radio porque no quieren que la gente descubra y sepa lo que hacen: sus mentiras y sus robos, su desprecio y represión al pueblo". *Radio Ñomndaa* y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron la injusta condena y anunciaron que apelarán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) "para que se revisen todas las irregularidades cometidas por el juez Derly Arnaldo Alderete Cruz".

Ojarasca

Presos políticos mapuche Pewün: Volver a verse

José Quidel Lincoleo

Un sábado nos dispusimos a visitar a los *peñi* (hermanos) presos en la cárcel de Temuco. Allí pasan sus días y noches una decena de jóvenes provenientes de diferentes comunidades o lof. Ya llevan más de un año presos, sólo por sospecha y una ley antiterrorista de la dictadura que en “tiempos de demoracia” el gobierno les aplicó. ¿Qué podríamos llevar a hermanos en huelga de hambre?, me preguntaba. En otras ocasiones, había visitado a otros *peñis* caídos por otros motivos, entonces se podía llevar comida mapuche, comida *wigka*. Esta vez, era diferente. Amaneció un día nublado, el frío era aún intenso en vísperas de primavera en Gulu Mapu (Chile)

Nos acercamos a la penitenciaría, había que “enrolarse”. Eso significa presentar su identificación, sacarse una foto desde la web-cam del computador de la penitenciaría, entregar tu dirección, decir a quién vas a visitar, la relación que tienes con la persona, todo muy controlado. Según el gendarme, es parte de la nueva ley. Ese acto de “enrolarse” provoca recelos en gran parte de nuestra gente, porque ello significa “ficharse”, es decir que entras en el círculo de aquellos “terroristas” y que puedes pasar a ser considerado también uno de ellos... te pueden inculpar, me dicen los *peñi* y *lamgen* en los lof... ese enrolarse debe funcionar como una red, saber quiénes van y por quién...

La visita fue breve, mucha gente, mucho que hablar o poco... los jóvenes (que bordean los 24 años en promedio) están decididos a continuar con la huelga de hambre, para ellos es una lucha importante, la única forma de hacerse escuchar, ya se han agotado muchos mecanismos, se ha perdido la confianza en los gobiernos, muchas veces quebrantadas... es una medida extrema, pero ya han pasado muchos años sin que los gobiernos hayan realizado un gesto político serio, responsa-

ble, ético hacia el pueblo mapuche.

Ellos están pidiendo que se les escuche fundamentalmente con seriedad, que los organismos de Derechos Humanos tomen carta en estos asuntos. Que los abogados, las facultades de derecho de las “ilustres” universidades de Latinoamérica se pronuncien, debatan sobre estos temas. Ellos están muy claros en sus exigencias: fin a la Ley Antiterrorista, fin al doble enjuiciamiento y a la militarización del territorio mapuche, y devolución de las tierras ancestrales. Están claros en que se debe abordar este conflicto desde una perspectiva política y no de respuestas anacrónicas y de indigenismo asistencialista o integracionista como la que se quiere entablar en la mesa de discusión y las soluciones que el gobierno chileno quiere dar a los mapuche.

Me encuentro con muchos rostros, jóvenes en la huelga de hambre, sus familiares, madres, padres, hermanos, hermanas, amistades, compañeros y compañeras, son rostros mapuche, cansados de injusticia, cansados de dolor, de angustia, de represión, de pobreza, despojo, pero dignos, que cargan la vida, la esperanza, el dolor del parto y el amor infinito a los hijos en huelga de hambre. Están también los pequeños hijos e hijas de algunos huelguistas con quienes aprovechan todo momento de abrazarse y dar/recibir las caricias y cariños contenidas por tanto tiempo.

Los presos políticos mapuche tienen horarios diferenciados del resto de la población penal; de esa forma, allí sólo estamos quienes vamos a ver a los *peñi* en huelga de hambre. Les hago entrega de una carta de apoyo con firmas de alumnos y profesores de diferentes planteles universitarios académicos de Brasil. Les informo de que las firmas continuarán, que enviaremos el documento al gobierno y otros espacios en donde se pueda mostrar.

En nuestra mente se cruzan

muchos pensamientos, pero ellos nos aterrizan nuevamente con sus convicciones, fortalezas. Están muy fuertes, se ven íntegros a pesar de los dos meses ya de huelga de hambre. A pesar de haber perdido sobre 10 kilos, a pesar de estar algunos en silla de ruedas, de sentir dolor en sus espaldas, de estar leyendo con dificultades, a pesar de la indiferencia del presidente electo democráticamente.

Los familiares, acongojados por las decisiones de sus seres queridos, entienden que es una medida extrema, pues no han sido escuchados, no son entendidos y son perseguidos por un sistema judicial que una vez más se ensaña con aquéllos que son diferentes, con aquéllos que han intentado borrar de la memoria y la historia oficial, de la

rol que los jueces o el poder judicial juega en este histórico conflicto. Poder que ha aplicado las leyes arbitrariamente elaboradas por un legislativo en su mayoría ignorante de la existencia del pueblo mapuche, parlamentarios que con un gran racismo hablan de lo mapuche como parte de un folklor, de un pasado remoto, con el que no tienen ninguna relación.

El escenario es predecible en alguna medida. Un Chile que fuera de la cárcel de Balmaceda, a unas cuadras de allí, se apresta a celebrar otro 18 de septiembre, otra fiesta patria, con banderas por todos lados, guirnaldas que adornan hasta los más miserables locales comerciales, música por doquier. Y un clima de ale-

ver. A veces la lucha no se entiende. Pero hay convicción, hay *newen* (fuerza), hay fe en lo que se hace. Desde lejos llega la solidaridad, desde rincones impensados, desde otras latitudes, de gente que no les conocemos su *az* (rostro, forma de ser) pero allí están. En otras regiones del propio Chile al parecer hay más conciencia, pero en la región misma se respira un aire de ignorar, un no querer ver y no poder expresarse.

Una pregunta que se ha hecho sentir con fuerza en la región: ¿Por qué bicentenario, si en tierras mapuche sólo se llegó hace 129 años? Nadie quiere abordar esa parte, nadie quiere conversar seriamente de aquello, porque se rompería la unidad nacional. Sería un atentado a la homogeneidad de un país solidario,



DANZA DE LOS ENCANTADORES DE PECES, POR RAY TROLL

cotidianeidad chilena, que sin embargo reaparecen siempre, con nuevos bríos, nuevas fuerzas, nuevas ideas reclamando su lugar arrebatado, pisoteado y humillado en los tribunales por jueces que nunca han entendido la realidad de aquel pueblo que le es lejano. Jueces que históricamente han vapuleado los intereses mapuche. Como es en los juicios por nuestras tierras, que a pesar del derecho legítimo sobre nuestro territorio desde 1900 hemos perdido prácticamente todo. Ésa es la justicia para los mapuche. Casi nadie habla de la importancia y el

gría, de jolgorio, de relax, se respira. El chauvinismo chileno se toma el país. Otro mundo, otra realidad lejana de la que vivimos los mapuche. Ajenos del dolor, de la mentira, la falacia, la risa de aquéllos que montan mentiras y tramas para encarcelar mapuche. Celebran aquéllos que ven a estos mapuche como una amenaza a sus bienes, sus capitales, sus inversiones.

Al parecer la región de la Araucanía está vacunada contra “el problema mapuche”. Los que ayer eran amigos, hoy no están, no se aparecen para solidarizar, no se dejan

esforzado, valiente, dicen los discursos.

Uno de los padres de los huelguistas me decía: “Peñi, usted sabe que esta lucha no termina aquí, el camino es largo: al final esto recién comienza”.

Septiembre.
Temuco, Chile.

José Quidel Lincoleo es logko, líder tradicional mapuche. Estudia una maestría en la Universidad Estatal de Campinas. Brasil. Tomado de Azkintuwe.